



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, dos (02) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: JORGE BAQUERO VÁSQUEZ
Demandados: ACP COLPENSIONES, PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN
Radicado: 05001 31 05 007 2021 00261 01
Sentencia: S-017

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la ACP COLPENSIONES, al igual que el grado jurisdiccional de Consulta en lo no recurrido por esta entidad, con motivo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín el día 05 de mayo de 2022.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

JORGE BAQUERO VÁSQUEZ demandó a PORVENIR S.A., a PROTECCIÓN S.A. y a COLPENSIONES, pretendiendo se declare la nulidad y/o ineficacia del traslado efectuado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad por no habersele proporcionado una información completa y comprensible, disponiéndose su retorno a

COLPENSIONES sin solución de continuidad, con la consecuente orden de trasladar todos los aportes recibidos. Pretende además se condene en costas y gastos del proceso a las entidades demandadas.

LOS HECHOS

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 07 de febrero de 1962, al comenzar su vida laboral se afilió para pensionarse al Instituto de Seguros Sociales -ISS-; el 25 de agosto de 1994 se trasladó a PORVENIR S.A., al Régimen de Ahorro Individual -RAIS-; el 01 de agosto de 2010 afilió a la AFP PROTECCIÓN S.A.; dice que al momento del traslado de fondos no le dieron la información necesaria, que se limitaron a decirle que el ISS se iba a acabar y él se quedaría sin pensión, además de que en el fondo privado se podía pensionar a cualquier edad y con una prestación mejor. No le indicaron sobre la diferencia del valor pensional en ambos regímenes, que la pensión varía en el RAIS de acuerdo al rendimiento de los aportes y que si tenía esposa o compañera la pensión disminuiría, dependiendo de la edad.

El 15 de marzo de 2021 solicitó a Colpensiones el traslado al Régimen de Prima Media -RPMPD-, petición que le fue negada por cuanto le faltaban menos de 10 años para pensionarse.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, PORVENIR S.A. dice que no le consta la fecha de nacimiento del demandante, tampoco su afiliación al ISS; niega los hechos relacionados con la falta de información de dicho fondo al momento del traslado del actor indicando que la misma se realizó de forma libre y voluntaria el 28 de agosto de 1994, cuya efectividad inició el 01 de septiembre de ese mismo año; en cumplimiento de las obligaciones vigentes para esa época, otorgándose información sobre las condiciones y características del régimen pensional, el régimen de

transición, bonos pensionales y los requisitos y condiciones para acceder a una pensión. Se opuso igualmente a las pretensiones de la demanda indicando que no se demostró causal que invalide la afiliación, la cual se realizó producto de una decisión voluntaria del demandante. Como excepciones propuso prescripción, prescripción de la acción de nulidad, cobro de lo no debido por la ausencia de causa e inexistencia de la obligación y buena fe.

COLPENSIONES acepta la fecha de nacimiento del demandante, la de afiliación al ISS el 13 de julio de 1987, conforme al reporte de semanas cotizadas, la de traslado a PORVENIR S.A. y a PROTECCIÓN S.A., así como la solicitud de traslado presentada por el actor y su negativa; no le consta lo demás por tratarse de situaciones relacionadas con terceros que deben ser probadas en el curso del proceso. Se opuso además a las pretensiones por cuanto no se encuentran soportes fácticos y legales para acceder a las mismas. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación demandada y falta de derecho para pedir, inoponibilidad de la responsabilidad de la AFP ante Colpensiones, buena fe, prescripción, imposibilidad de condena en costas, innominada o genérica.

Por su parte PROTECCIÓN S.A. acepta la fecha de nacimiento del demandante y la afiliación a esa AFP el 01 de agosto de 2010; dice que no le consta la fecha de afiliación al ISS, tampoco a PORVENIR S.A.; niega los hechos relacionados con el traslado del demandante, refiere que esa AFP en ningún momento le indicó al actor que el ISS se iba a acabar, además de que le explicó la forma en la que se constituye la pensión, y la pensión anticipada en el RAIS, la rentabilidad en el sistema financiero, los requisitos y las edades del régimen de prima media para recibir una prestación. Se opuso igualmente a las pretensiones de la demanda indicando que el acto de afiliación del demandante es válido, exento de vicios del consentimiento y de cualquier fuerza para realizarlo. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación y falta de causa

para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos del sistema general de pensiones, validez y eficacia del traslado entre administradoras de fondo de pensiones del RAIS, reconocimiento de restitución mutua en favor de la AFP, inexistencia de la obligación de devolver la prima de seguro previsional cuando se declare la ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe, innominada o genérica.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 5 de mayo de 2022, el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín tomó las siguientes decisiones:

“PRIMERO: DECLARAR la **INEFICACIA** del traslado efectuado por el señor **JORGE BAQUERO VASQUEZ** del RPMPD al RAIS administrado por **AFP PORVENIR**, en el año 1994 y su posterior **traslado intra-régimen** en el año 2010 a la AFP ING hoy PROTECCION.

SEGUNDO: Se **DECLARA** que el demandante se encuentra válidamente afiliada al RPMPD administrado por **COLPENSIONES** sin solución de continuidad

TERCERO: En consecuencia, se **CONDENA** a la **AFP PROTECCION** a trasladar los dineros de la CAI aportes y rendimientos y aportes al FGPM con sus rendimientos financieros con destino al fondo común de COLEPNSIONES, se exceptúan de dicha devolución los dineros destinados a pago de cuotas de administración y prima de seguros previsionales para los riesgos de invalidez y muerte conforme a lo señalado en la parte motiva de esta providencia. Estos dineros deberán ser trasladados dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

CUARTO: SE **CONDENA** a **COLPENSIONES** a validar la afiliación de la demandante y recibir la devolución de los dineros ordenada en este proveído, además de tener en cuenta el tiempo cotizado por la demandante en el RAIS, como

semanas cotizadas que deberán reflejarse en su historia laboral.

QUINTO: Las excepciones propuestas por las codemandadas se declaran no probadas, excepto las excepciones de BUENA FE e **IMPOSIBILIDAD DE LA CONDENA EN COSTAS** propuesta por COLPENSIONES y la de devolver cuotas de administración y la inexistencia de la obligación de devolver prima del seguro previsional propuestas por la AFP PROTECCION y de oficio a favor de la AFP PORVENIR conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia

SEXTO: Se **CONDENA** en costas a **AFP PORVENIR S.A.** y **AFP PROTECCION** fijando el despacho como agencias en derecho la suma de **UN MILLON DE PESOS, MONEDA LEGAL, (\$1.000.000) equivalente a un SMLMV**; a favor de la demandante y cargo de cada una de las codemandadas. Se abstiene el despacho de condenar en costas a Colpensiones por las razones indicadas en la parte motiva de esta decisión.

SEPTIMO: Si el presente fallo no fuere apelado, por haber resultado adverso a los intereses de **COLPENSIONES** en virtud de lo que dispone el artículo 69 del CPTSS, se remitirá el expediente y la grabación a la Sala Laboral del Honorable Tribunal Superior de Medellín, para que allí se surta el grado jurisdiccional de consulta."

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con lo decidido, la apoderada de Colpensiones presentó recurso de apelación solicitando que de considerarse que efectivamente es procedente la declaratoria de la ineficacia, se modifique la sentencia de instancia, en el sentido de ordenar a las AFP Protección S.A. y Porvenir S.A. a trasladar a Colpensiones el 100% de las cotizaciones realizadas por el demandante sin descuento alguno, esto es, que además de los aportes, rendimientos, traslade el valor de todos los gastos de administración y cuotas de seguros previsionales, en virtud de lo establecido en la Sentencia SL8989 de 2008 en la que ordenó a los fondos de pensiones privados, incluso con cargo a su

propio patrimonio, devolver la totalidad de las cotizaciones sin descuento alguno, posición reiterada en la jurisprudencial tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia, en donde ha sido vehementes en ordenar tal circunstancia; lo anterior, en atención al principio de sostenibilidad financiera del sistema.

Se conoce del asunto también vía grado jurisdiccional de **Consulta** a favor de COLPENSIONES, en lo no recurrido.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término legalmente concedido, la apoderada de Colpensiones presentó alegatos de conclusión ratificándose en los argumentos expuestos en el recurso de apelación, insistiendo en la solicitud de ordenar a ambos fondos privados la devolución de todos los conceptos recibidos con ocasión de la afiliación, los gastos de administración y los seguros previsionales, junto con la respectiva indexación.

Por su parte la apoderada de PORVENIR S.A. solicita se confirme la sentencia de primera instancia por cuanto está ajustada a derecho, Porvenir S.A. trasladó a la AFP a la que el demandante se afilió con posterioridad a la vigencia de vinculación a Porvenir S.A., todos los valores que se encontraban en la cuenta de ahorro individual a la que efectuó el traslado horizontal.

CONSIDERACIONES:

Se procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por la ACP COLPENSIONES en contra de la sentencia de primera instancia, e igualmente conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA en lo no recurrido por esa misma entidad, conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado acreditados, se encuentran los siguientes: **i)** el señor JORGE BAQUERO VÁSQUEZ nació el 07 de febrero de 1962 ; **ii)** se afilió por primera vez al sistema pensional en el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES –ISS- y comenzó a realizar cotizaciones allí, el 13 de julio de 1987; y **iii)** el 25 de agosto de 1994 suscribió formulario de afiliación o traslado ante la AFP PORVENIR S.A., efectivo a partir del mes de octubre de 1994; el 01 de agosto de 2010 se afilió a PROTECCIÓN S.A. (ING S.A.) entidad a la cual se encuentra actualmente vinculado, siendo efectivo su traslado para el mes de noviembre de ese mismo año.

Ahora bien. La diferencia jurídica que se plantea en este caso, consistente en la pretensión de la parte actora en punto que se declare ineficaz el traslado que efectuó desde el Fondo público y común administrado por el ISS, al Fondo privado de ahorro individual, fundada en una insuficiente información por parte de esta última entidad en cuanto a las consecuencias reales de dicha determinación, ha sido materia de múltiples decisiones judiciales orientadas desde la cúspide de la jurisdicción ordinaria laboral.

Si bien es cierto, en principio, tal traslado se hizo como producto de un concurso de voluntades entre personas plenamente capaces, no lo es menos que se presentaba una relación asimétrica en el sentido de que los Fondos privados como agentes del sector financiero de la economía, tenían, desde su creación, el deber legal de suministrarle al afiliado una explicación completa pero concreta, hecha a la medida de la situación particular del interesado, de la consecuencias del traslado y con la esencial finalidad de que este pudiese tomar una decisión informada sobre un aspecto ligado a su proyecto de vida futura.

En efecto, desde la expedición del decreto 663 de 1993¹, o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el que en su Capítulo VIII incluye a

¹ Norma posteriormente actualizada por la ley 795 de 2003 “*ley por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico Financiero*”

las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, dispuso dicha obligación en los siguientes términos:

*“Art 97. **Información a los usuarios.** Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan, la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claro y objetivo, escoger las mejores opciones del mercado”.*

Por su parte, la Ley 100 de 1993 también intervino el punto, pues en su artículo 273 estableció:

*“Art. 271. **Sanciones para el Empleador.** El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa, impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”*

Así mismo, importa señalar al respecto, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada, pacífica y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación, advirtiendo, además, que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que la persona afiliada no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba positiva por la cual se acredite que tal obligación sí se cumplió.

Tesis que se introdujo desde las sentencias 31.989 y 31.314, ambas del 9 de septiembre de 2008, por cuenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años a través de múltiples pronunciamientos. Cabe destacar lo que se dijo en aquellas primeras providencias, así, en la Rad. N° 31.989 de 2008:

“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.”

Del desarrollo jurisprudencial posterior se evidencian algunos ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente:

- (i) El juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico;
- (ii) El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues ello no demuestra por si solo que se hubiere brindado una información idónea, y se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado;
- (iii) Le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal

decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y

- (iv) No es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no se observan pruebas fehacientes que permitan tener por acreditado que el fondo privado brindó, en el momento del traslado, una información integral de las condiciones subjetivas del afiliado, con explicación de las ventajas y desventajas de la reubicación entre regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que aquel pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, el Fondo privado incumplió su deber de información, al no suministrar, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

Del interrogatorio de parte absuelto por la parte actora, se destaca su manifestación en torno a que el fondo de pensiones PORVENIR S.A. al momento del traslado al régimen de ahorro individual no le explicó sobre las características de dicho régimen, *"la charla duró 10 o 15 minutos"*, la funcionaria de PORVENIR S.A. ya tenía el formulario listo, solo faltaba firmar; insiste en que al momento del traslado le indicaron que le convenía más estar en el fondo privado pues el ISS se iba a acabar, no le explicaron sobre los rendimientos financieros, tampoco sobre el bono pensional. Ante la pregunta realizada por la apoderada de PORVENIR S.A. acerca de la razón por la cual se trasladó a PROTECCIÓN S.A. (ING S.A.), expresó que la funcionaria de esa AFP le dijo que allí iba a tener un trato más personalizado e iba a recibir los extractos para verificar las cotizaciones, sin recibir tampoco información acerca de las características de ese régimen pensional.

De lo anterior no se deriva que aparezca clara la prueba de un reconocimiento de que los promotores del Fondo privado hubieren informado en detalle las diferencias jurídico-financieras de los sistemas pensionales, con expresión de sus características propias, así como las repercusiones que una decisión de semejante calado podría traerle al afiliado al momento de hacer efectiva la prestación.

Lo anterior permite dar aplicación al citado artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

En consecuencia, en este puntual aspecto se **CONFIRMARÁ** la decisión adoptada en primera instancia.

Ahora bien, no es de recibo el argumento de COLPENSIONES en cuanto solicita considerar las implicaciones económicas que se pueden llegar a generar con decisiones como ésta, especialmente por existir una eventual afectación a la sostenibilidad financiera del sistema más cuando no participó en el acto de traslado, siendo un derecho que ejerció el demandante en su momento y permitido según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003.

El principio de sostenibilidad financiera de las pensiones, entronizado en el Acto Legislativo 01 de 2005, está orientado a lograr el aseguramiento de su propia subsistencia. Esto es, se impone la garantía de que se pueda contar con los recursos necesarios para reconocer y pagar las diversas prestaciones a los afiliados al sistema, presuponiendo la limitación de los recursos disponibles, y que, por ello mismo, deben ser distribuidos de acuerdo con las necesidades de la población, buscando la efectividad de los derechos y la eficacia y

solidaridad del sistema. Y para esto es indispensable asegurar el pago efectivo de las cotizaciones, aunado al concurso del Estado cuando ello sea requerido, de tal modo que el sistema sea viable para el pago de las pensiones de los actuales y futuros pensionados.

En casos como el presente, el regreso del demandante al RPM no implica que necesariamente vaya a haber una afectación al sistema, pues a dicho fondo le llegan los dineros que el demandante alcanzó a acumular en el Régimen de Ahorro Individual junto con los rendimientos financieros y todos aquellos conceptos recibidos por administración de los recursos, seguros y garantía de pensión mínima como más adelante se verá, sin que esté probado en el proceso que no sea posible financiar la pensión a la que pueda llegar a acceder.

Conceptos a devolver.

De otro lado, en cuanto a la decisión de la *a quo* de ordenar el traslado del saldo existente en la cuenta de ahorro individual junto con los rendimientos financieros y aportes destinados al fondo de garantía de pensión mínima, pero sin incluir lo relacionado con las cuotas y/o gastos de administración y los seguros previsionales, tema que se revisará según el recurso de apelación planteado por COLPENSIONES, basta con indicar que, siguiendo aquellos mismos pronunciamientos de la jurisprudencia laboral, esta Sala ha considerado que es factible ordenar a las AFP correspondientes, la devolución a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación fallida, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto las cosas vuelven a su estado anterior, como si el traslado nunca hubiera existido.

En tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencias como la SL4964-2018, SL2877-2020, SL5595-2021 o SL1637-2022, lo siguiente:

“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia. (...)

En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho la demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.”

De otro lado, es necesario tener en cuenta que, en la sentencia ya referida, la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia fue clara en establecer que la declaratoria de ineficacia de traslado cubija a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el respectivo afiliado “... aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implican dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen...”.

Dijo además en esa providencia, que:

“Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal. (...)

De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado el actor, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si

participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones."

En consecuencia, la decisión deberá ser **MODIFICADA** en el sentido de ordenarle a la AFP PROTECCIÓN S.A. que proceda igualmente a la devolución de los porcentajes descontados por concepto de cuotas y/o gastos de administración, incluyendo las primas de seguros y reaseguros y el porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima, es decir, todas aquellas sumas de dinero recibidas durante el tiempo que el señor JORGE BAQUERO VÁSQUEZ estuvo vinculado a esa entidad.

Además, la decisión deberá ser **ADICIONADA** en el sentido de ordenarle también a la AFP PORVENIR S.A., que proceda a trasladar a COLPENSIONES las cuotas y/o gastos de administración, sumas adicionales de las aseguradoras y porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima, recibidos durante el tiempo de vinculación del demandante en esa entidad.

No es procedente la indexación según se solicita en los alegatos de conclusión presentados en esta instancia por COLPENSIONES, pues se trata de una cuestión que debió plantearse en la contestación de la demanda o cuando menos en el recurso de apelación, de manera que una decisión en tal sentido implicaría decidir más allá de lo pedido, lo que no resulta procedente en sentencias de segunda instancia.

Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, el día 05 de mayo de 2022, pero con las siguientes novedades según se dijo en la parte motiva: **1.** La **MODIFICA** en el sentido de ordenar a la AFP PROTECCIÓN S.A., que proceda igualmente a trasladar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, el valor recibido por concepto de cuotas y/o gastos de administración, incluyendo porcentajes de seguros y reaseguros, comisiones y aportes al fondo de garantía de pensión mínima, durante el tiempo que el demandante estuvo afiliado a esa entidad; **2.** La **ADICIONA** en el sentido de ordenar también a PORVENIR S.A., que proceda a trasladar a COLPENSIONES, el valor recibido por concepto de cuotas y/o gastos de administración, incluyendo porcentajes de seguros y reaseguros, comisiones y aportes al fondo de garantía de pensión mínima, durante el tiempo que el demandante estuvo afiliado a esa entidad.

Sin costas en esta instancia.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **066ce6c83b1a93356671fba0f6a009befb88279c7c60832f53a9e6963bcd9a4a**

Documento generado en 02/02/2023 02:58:29 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>